Globethics Repository



Repensando la democracia desde el ajuste [Rethinking democracy from the adjustment]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Echegaray, Fabián;Raimondo, Ezequiel
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-15 01:57:54
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220646

NUEVA SOCIEDAD NRO.113 MAYO- JUNIO 1991, PP. 84-90

Repensando la democracia desde el ajuste: una perspectiva crítica

Raimondo, Ezequiel; Echegaray, Fabián

Ezequiel Raimondo: Cientista político argentino, autor del libro Desencanto Político. Transición y Democracia. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1987, y miembro del Consejo Directivo de Planes-Centro para el Análisis de Tendencias Contemporáneas.
Fabián Echegaray: Cientista político argentino, autor del libro Desencanto Político. Transición y Democracia. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1987, y miembro del Consejo Directivo de Planes-Centro para el Análisis de Tendencias Contemporáneas.

En las últimas décadas, las ciencias sociales centraron su dedicación en definir si la relación desarrollo-democracia resultaba compatible. Hoy, esa discusión parece lejana y fuera de contexto; el ajuste económico, y sus efectos recesivos, son el tema número uno de la agenda política de los 90. Pero poco es lo que se ha reflexionado en relación con su impacto sobre la democracia.

La necesidad del ajuste ha logrado un consenso alarmante en la clase política de nuestros países como vía unívoca para la salida de la crisis.

Lo más sorprendente es su contundencia, tanto más cuanto que desecha ciertos valores cuidadosamente cultivados durante décadas como la autogestión, el cooperativismo y el libre asociacionismo de los pequeños capitales, como opciones no estatales de consideración. Pero la principal sorpresa, francamente desconcertante, anida en la conflictiva paradoja que encierran sus promesas, recostadas sobre el insólito cálculo de sus lucros políticos para un día que parece destinado a no llegar nunca en el calendario.

Las promesas del ajuste

Lo que nos asombra, en definitiva, es este salvataje de la política por la economía, a la cual apuestan nuestros gobiernos.

Junto al ajuste, suele augurarse un porvenir de prosperidad, un Estado que no nos fastidie ni nos desguarnezca; en suma: la posibilidad de generar un clima que nos

permita alcanzar la felicidad económica. Pero principalmente y casi siempre, el ajuste es presente o la condición sin la cual nuestras democracias no tendrán futuro, ni las sociedades paz.

Sin ajuste, sobreviene el caos inflacionario, la violencia social y la guerra larvada entre los sectores más y menos organizados de la población; y es claro que, en este escenario, sobran los políticos, quedando el centro de la escena a merced de sus históricos y desleales competidores: los militares y/o las guerrillas.

Sin ajuste, es decir, en un contexto hiperinflacionario, la democracia se esfuma de las prioridades de la mayoría, y el poder del gobierno se transforma en el blanco preferido. De aquí, que al anteponer la ruptura económica a la política, la violencia del ajuste se proyecte como positiva.

Sabemos que la inflación no sólo carcome el poder del dinero, sino también el poder de los gobiernos. Junto con la depreciación de los recursos económicos, rueda la depreciación de los recursos políticos; particularmente, los de quienes se les confió la tarea de ejecutar decisiones. Al aumentar los precios, se estrechan su prestigio, su consenso, su margen de actuación y su capacidad de anticipar políticas[1] . El ajuste brota entonces; como un freno contundente y necesario para salir de la inflación.

Visto de este modo, el ajuste parece garantizar en lo inmediato que cada sector ocupará el territorio institucional que le corresponde, o sea: los políticos en el gobierno y no allí los golpistas; los militares en los cuarteles y no allí los guerrilleros; los consumidores en los supermercados y no allí los saqueadores. Pero fundamentalmente, asignará y encuadrará las funciones prescriptivas que a cada uno le toca en una democracia débil: a los políticos decidir, a los empresarios producir, a los trabajadores trabajar, y a los ciudadanos votar gobiernos, luego obedecerlos y, por último, poder cambiarlos.

De lo expuesto, podríamos acordar que la democracia estaría resguardada. Pero ¿qué tipo de democracia es la que emerge del ajuste?

---

[1]A lo largo del último lustro de paquetes económicos antiinflacionarios, se ha podido comprobar nítidamente la diferencia inversamente proporcional entre tasa de inflación y nivel de popularidad del gobierno. Al respecto, ver: Portantiero, Juan Carlos. Argentina: la democracia y la creación de rutinas institucionales. Ponencia presentada en la conferencia «Transiciones a la Democracia en el Tercer Mundo», UBA, Buenos Aires, 27 al 29 de agosto de 1985; y Echegaray, Fabián-Raimondo, Ezequiel: Desencanto Político, Transición y Democracia, CEAL, Colección Biblioteca Política Argentina, n° 177, Buenos Aires, 1987.

Lejos de negar la capacidad disruptiva de la hiperinflación, que lo arrastra todo hacia el desorden social y político (ingobernabilidad), sostenemos que no es menos cierto que ella también auspicia la utilización progresiva de medidas drásticas, de excepción, cuya vocación se apoya sobre la voluntad política de reordenarlo todo radicalmente. En tal caso, la hiperinflación puede ser tanto un factor que corroe el poder del gobierno y lo pone contra la pared, como una oportunidad abierta para el ejercicio de una presidencia imperial. La inflación desbocada alienta la trasgresión de las reglas democráticas por parte de las masas, pero principalmente, la endosa (o transfiere) al gobierno la necesaria «legitimidad» como para decidir la aplicación de políticas extremas ante la urgencia que se impone.

El ajuste, desde esta perspectiva, no sólo le devuelve al gobierno el control de la coyuntura, sino que adiciona el control sobre todos los otros actores económicos y políticos de una democracia. Con ello, es el gobierno quien pasa a reasignar los papeles económicos y políticos, no el mercado ni las reglas de la democracia.

Lo que a primera vista parece intervenir exclusivamente sobre la economía, acaba trastocando la vida política; y todo por el efecto de la excepcionalidad de la situación que ayuda a calificar al debate parlamentario como superficial, vuelve excéntrica a la protesta y, sobre todo, revoca cualquier argumento alternativo al férreo ajuste. La agenda pública de la democracia queda prisionera de los dictámenes que la dureza económica del ajuste impone; y todo esto es factible gracias al pretexto de asegurar la propia continuidad de esa agenda.

De lo antedicho, se desprende que el ajuste devuelve al gobierno más poder del que tenía, pero a costas de una democracia más dócil, predecible y acotada. Por eso, la democracia del ajuste no puede tolerar un Congreso incisivo, ni un Poder Judicial independiente, ni una ciudadanía activa, so pretexto de que el descalabro hiperinflacionario rebrote.

El ajuste político

Este es el ajuste político tal como los propios presidentes lo han dejado entrever, lo que fuerza a la política a retirarse a ámbitos más restringidos, concretamente: a la privatización de la política. El ajuste perfila, augura o prepara un modelo de democracia sin ciudadanos.

Tras años de inflación, el ajuste tiene como inevitable interlocutor a un «homo economicus» acostumbrado a la maximización de su participación en cualquier activi-

dad interpersonal. Pero su hombre ideal es el prototipo calvinista. Su modelo de sujeto económico es el individuo puritano, el asceta, acostumbrado al máximo ahorro y al conservadurismo material. Sin embargo, su principal virtud en lo inmediato se convierte en un paradójico desafío a mediano plazo, una vez que, a la hora de la recaudación fiscal (en especial, cuando la base impositiva se asienta predominantemente en la carga al consumo) este individuo sólo ofrece decepciones. Y las ofrece, en tanto su racionalidad calvinista se proyecta exclusivamente en los objetivos del mínimo gasto y del máximo proteccionismo, dejando a un lado la apuesta por el trabajo y la inversión como garantías de salvación. No es más que una cultura del máximo atesoramiento: en definitiva, un calvinismo sin cielo.

Simultáneamente, su modelo de sujeto político no puede ser otro que un ciudadano mínimo, poniendo el acento en sus obligaciones y, eventualmente, en alguna que otra libertad, pero que se olvida de sus derechos (Lasch, 1986). E1 único inconveniente vuelve a emerger al momento de la correspondiente recaudación de votos, cuando este individuo demuestra su desinterés por el sufragio y su apatía frente al gobierno[2].

La natural consecuencia de la política del ajuste es la reducción de los espacios de encuentro público, la del cierre o clausura de los canales de participación y/o de agregación de reclamos o protestas. Por lo tanto, la crítica a la «partidocracia» y a la institución parlamentaria se inscribe dentro de patrones funcionales a la ideología del ajuste.

El ajuste se proyecta como una política de racionalización de la democracia, minimizándola como territorio de participación política y bienestar social, como mecanismo de equilibrio entre demandas y actores en puja, y como posibilidad de desarrollo individual de la propia personalidad. Pero, alarmantemente, también la racionaliza en su función más elemental e históricamente originaria: esto es, como protección de los gobernados frente a la opresión indirecta (v.gr., tarifazos, impuestazos, falta de seguridad individual, etc.) del gobierno (Macpherson, 1981). El ajuste induciría, así, a una desdemocratización progresiva de la vida cívica, como atajo hacia la plena «gobernabilidad» civil.

[2]De algún modo, el elevadísimo porcentaje de abstenciones, junto a los votos en blanco y los nulos en las recientes elecciones de Brasil (03-10-90), respaldan nuestra tesis: 40% de la población procedió así en los casos de gobernador de Estado, 49,5% para senadores nacionales, y 65% para diputados nacionales.

La traducción empírica del ajuste político sigue los pasos de su par de naturaleza económica: la política entra en recesión, para sanear la democracia se apela a la asfixia de toda actividad que no esté dentro de los planes gubernamentales.

La política bajo el ajuste se torna un bien superfluo, y a esto apuestan los gobiernos. Si existe un pedido de informes del Poder Legislativo, si se quiere interpelar a un ministro, si la población manifiesta a través de encuestas, huelgas o actos públicos su disconformidad, lo que el presidente interpreta no es vida democrática sino interferencias de la política. Lo político, desde el discurso del ajuste, toma, pues, un cariz negativo. No extrañará, entonces, leer declaraciones o ver en la televisión a políticos profesionales de tiempo completo (presidentes de la nación incluidos) hacer gala de una esquizofrenia sin límites descalificando a los políticos y a la actividad política propiamente dicha con una liviandad preocupante.

Para que este momento, al que las democracias sometidas al ajuste han llegado, no se transforme de nuevo en caos, parecen haber dos salidas: o la eficacia creciente de las acciones del gobierno, de modo tal que asegure su centralidad sin tener que continuar con el ajuste; o la persistencia de una inflación latente, nerviosa, que mantenga al gobierno como único eje de la atención pública, consolidando sus facultades extraordinarias y garantizando un umbral mínimo de apoyo popular difuso.

Ajuste con inflación

Lo que puede observarse a la luz de los últimos meses es el claro predominio de la segunda opción, que se patentiza en la aplicación de choques económicos que dejan a la inflación en pie. Así, se establece una suerte de «chantaje inflacionario» que pone por adelantado en las manos del gobierno la eventual sanción del ajuste siguiente, reteniendo al mismo tiempo una centralidad excluyente en su rol de «piloto de la tormenta».

Si las preocupaciones oficiales se han focalizado en el control de la hiperinflación que esfumaba su poder, pero a cambio de lograr luego un mayor control sobre la dinámica de la democracia, entonces el ajuste ha resultado ser una pieza ideal. Así, para continuar acaparando la atención en los espacios públicos, nada resulta más conveniente que el mantenimiento de una política que ajusta todo menos a la inflación.

De esta manera, la cohabitación de ajuste + inflación cumple una función que reemplaza a las reglas políticas, cual es la de disciplinar (por acotar) el margen de acción de todos los actores de una democracia, con excepción del gobierno.

Por eso, nos engañamos si pensamos a la inflación que sobrevive el ajuste como un fenómeno puramente económico o que reúne apenas connotaciones culturales. La inflación llega a ser un fenómeno cultural si es primero estructural y endémica. Ciertamente, la inflación lleva al cortoplacismo, al consumismo inmediatista y desaforado, y al imperio del egoísmo más descarnado; en síntesis, a una cultura inflacionaria; pero éste es el efecto, la resultante de un ejercicio inflacionario dilatado, el día después de muchos años de inflación.

La inflación pos-hiperinflacionaria, es decir, la inflación del ajuste, es un fenómeno estructural y político porque ella sólo puede persistir si antes se conforma una alianza inflacionaria. Una alianza explícita o implícita donde sus miembros saben que sin ella sus costos serían mayores.

Sin inflación, los simulacros cotidianos de muchos sindicalistas, vinculados a algunas patronales y a las burocracias estatales, por mejorar el salario de los trabajadores (que, en muchos casos, ni siquiera los han votado), perderían mucho de su sentido y, por lo tanto, su razón de ser.

Sin inflación, muchos empresarios no podrían reajustar diariamente sus precios y congelar los salarios. No tendrían la excusa de los insumos y los impuestos que suben, que los «obligan» a encarecer sus precios. En definitiva: su lucro no excedería su capacidad competitiva, ya que no se beneficiarían de la confusión de los precios ni de la legitimidad latente que tienen los reajustes en épocas inflacionarias.

Sin inflación, muchos políticos y el propio gobierno se quedarían sin argumentos fáciles. Los primeros deberían hacer el inimaginable esfuerzo de persuadir a la gente con algo diferente a la protesta permanente por la crisis o aceptar la inevitabilidad del ajuste. Los obligaría a proponer cosas, a salir de su trinchera defensiva, y a recetar remedios no tan amargos.

Plantear un discurso de la pos-crisis, en medio de semejante recesión, podría parecer algo excéntrico, pero lo cierto es que se constituiría en un verdadero desafío cultural para muchos políticos acostumbrados a respaldarse en la inflación, y en la crisis propiamente dicha, para sobrevivir como tales.

Sin inflación, los partidos políticos entrarían en un estado de desconcierto tal, que se verían obligados a replantear no sólo su organización estructural sino, fundamentalmente, su modo de ejercer política; porque nuestros partidos políticos también están acostumbrados a generar políticas sin respaldo, es decir, a sustentarse sobre una base débil, inaprensible y volátil. La estrategia interna de acumulación de poder en los partidos es también, por conveniencia o por incapacidad, esencialmente inflacionaria. De allí que, en estas instituciones, la agregación de poder provoca una ilusión incremental cuando en realidad es siempre corrosiva. Esta modalidad de acumulación centrifuga afiliados y produce abiertamente el efecto contrario al deseado: la privatización de la militancia, el desencanto político y niveles asegurados de despolitización progresiva.

Sin inflación, el gobierno no podría justificar procedimientos abiertamente autoritarios como los choques económicos, como los decretazos, y como el cultivo de un personalismo que arrasa con las instituciones. Sin inflación, habría que sujetarse al diálogo con el Congreso y con la población, y a lo que las normas de la democracia imponen, porque la excepcionalidad y la emergencia dejarían de existir como excusas. Pero además de acabar con estos privilegios, sin inflación, el gobierno debería demostrar su eficiencia y su moralidad, de manera mucho menos cómoda que aumentando tarifas, multiplicando impuestos y recortando inversiones.

La alianza inflacionaria existe. Y existe porque, hoy por hoy, conviene más. Conviene más frente a la incertidumbre y a las exigencias que impondría una situación no inflacionaria; y porque es «preferible» frente a las exigencias que el capitalismo social les haría a muchos de los empresarios y sindicalistas, y que la democracia participativa les impondría a muchos de los políticos y al gobierno. Como la no inflación permanente es un escenario desconocido, con otras reglas, con otros valores, pero fundamentalmente con otros objetivos y otros actores - que desplazarían a los actuales del centro de la escena - la inflación es más segura.

Por eso, lo más perverso de este ajuste es que deja a la inflación sobrevivir tranquilamente en tanto continúe siendo útil al gobierno y a sus eventuales aliados; pero ¿podrá la democracia sobrevivir al ajuste? O será mejor preguntarse: ¿es la democracia tan útil como la inflación, y los medios autoritarios y de excepción que ésta convoca, para el gobierno y sus aliados?

En esta época de crisis, la mayoría de los partidos políticos democráticos de nuestros países están atrapados por la lógica del ajuste. Lo que parece no advertir es

que, la democracia que sigue al ajuste no los tendrá más como principales sujetos en la tarea de producción política.

Lo que sobreviene ya no es la democracia de la corporación de los políticos, tantas veces preanunciada. No sólo porque el ajuste político los pone en la periferia de la democracia «real» y moldea un discurso contra ellos, sino porque el modelo emergente buscará asentarse en aquellos agentes que gobiernan los mercados económicos y de comunicación de las ideas.

En alguna medida, la propuesta del ajuste es la de un sinceramiento a fondo del modelo político, aplicando una racionalización violenta sobre todas las intermediaciones (sean sociales, institucionales, etc.) que inflacionan la trama decisional. Si esto, en el largo plazo, puede tener como efecto positivo forzar a los partidos a abandonar una política clientelística de relación con la sociedad, en favor de una articulación programática, basada en la proximidad laboral con el público y la eficacia en satisfacer demandas concretas; antes, en el cortísimo plazo, multiplica un consenso condenatorio de la artificialidad, la inutilidad y la necesidad de deshacerse de los partidos.

Detrás del ajuste, asoma un claro intento por quebrar de una buena vez el oligopolio de la representación política ejercido por los partidos en una democracia, pero no para facilitar la inclusión de nuevos actores sociales o de nuevas metodologías de publicitación de intereses y valores hasta ahora excluidos. En su propuesta tácita de deflacionar la política y convertirla en un mercado con todas sus variables plenamente sinceradas, el ajuste traduce mecánicamente a la representación en términos de la personificación del liderazgo político o de la cristalización política de aquellos actores que concentran los principales recursos materiales de la sociedad.

En este sentido, el discurso del ajuste se vuelve particularmente engañoso. Si la meta de sincerar el mercado político aparece como orientada por un modelo económico de democracia, donde las políticas del gobierno pasen a explicarse por las preferencias de los individuos (la soberanía del consumidor reflejada casi exclusivamente en sondeos de opinión pública), a lo que al final de cuentas el ajuste abre el camino es a una creciente retradicionalización política de la democracia, es decir: a una vuelta a los patrones liberal-oligárquicos de organización y funcionamiento del Estado democrático.

El drástico sinceramiento político que propone el ajuste deja espacio para una democracia de oligarquías competitivas, basada en la libre competencia entre grupos

de alianzas socio-económicas plenas de recursos materiales, pero cuyo componente político-profesional irá paulatinamente desapareciendo.

La democracia pos-ajuste tiende a desechar, pues, toda organización cuyos recursos no excedan el plano simbólico y que sólo contribuyan a complejizar la esfera pública y a hacerla más importante que la privada. En consecuencia, los partidos están de más en este esquema. A los políticos les queda como alternativas volverse más eficientes hacia sus públicos específicos o practicar un fisiologismo abierto y acomodaticio, sin lealtades fijas.

Sin embargo, antes, podrían comenzar por elevar propuestas alternativas a la consolidación del ajuste, por cierto viables e infinitamente más compatibles con la democracia, como aquellas basadas en el cooperativismo, en el mutualismo, en el fomento de la autogestión, etc. En este sentido, las propuestas superadoras, por supuesto mucho más trabajosas e imaginativas, deberían orientarse a explorar el espacio público no estatal.

El impulso de conductas solidarias, la organización de redes que aglutinen a los consumidores para la defensa de sus derechos y la rejerarquización de los emprendimientos económicos regionalizados o de alcance municipal serían, de alguna manera, pilares inaugurales de una concepción más sustancial de democracia en contraposición al «modelo de salida única» que hace del ajuste un camino excluyente que no admite discusión.

Referencias

*Calderón, Fernando; Dos Santos, Mario, NUEVA SOCIEDAD. 110 - Caracas, Venezuela, Nueva Sociedad. 1990;

*Echegaray, Fabián; Raimondo, Ezequiel, DESENCANTO POLITICO, TRANSICION Y DEMOCRACIA. 177 - Buenos Aires, Argentina, CEAL, Colección Biblioteca Política Argentina. 1987;

*Lasch, Cristopher, O MINIMO EU. SOBREVIVENCIA PSIQUICA EM TEMPOS DIFICEIS. - Sao Paulo, Brasil, Editora Brasiliense. 1986;

*Macpherson, C. B., LA DEMOCRACIA LIBERAL Y SU EPOCA. - Madrid, Alianza Editorial. 1981;

*Portantiero, Juan C., ARGENTINA: LA DEMOCRACIA Y LA CREACION DE RUTINAS INSTITUCIONALES. - Buenos Aires, Argentina, Conferencia Transiciones a la Democracia en el Tercer Mundo. 1985; Hacia un Nuevo Orden Estatal en América Latina. Veinte Tesis Socio-Políticas y un Corolario de Cierre.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 113 Mayo-Junio de 1991, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**